



DE OLHO
NOS RURALISTAS
The Agribusiness Watch



TRATADO UNIÓN EUROPEA-MERCOSUR
Sin participación,
recortando selvas y derechos



RESUMEN

Resumen ejecutivo

- 1 El lobby de la agroindustria influye en las negociaciones
- 2 Las organizaciones denuncian violaciones de los derechos humanos
- 3 La expansión de las plantaciones de soja amenaza los territorios tradicionales
- 4 El acuerdo comercial deja vía libre a los pesticidas
- 5 Científicos y científicas critican la falta de medidas de aplicación

Referencias

CRÉDITOS

Concepto: Rettet den Regenwald/
Salva la Selva

Coautoría: Rettet den Regenwald/
Salva la Selva y Agribusiness Watch/
De Olho nos Ruralistas

Coordinación y revisión: Guadalupe
Rodríguez y Klaus Schenk

Investigación: Roberto Lameirinhas y Alex-
andra Martins Gonzaga

Escritor: Bruno Stankevicius Bassi

Revisión portuguesa: Alceu Luis Castilho

Revisión en inglés: John Hadyuska

Revisión en español: Guadalupe Rodríguez

Diseño gráfico: Nicole Obermann

Fotos: Foto de portada: Felipe Werneck/
Ibama/ www.flickr.com, Survival / p.2: Pau-
lo Fridman/ Alamy Stock Foto, p.3: Joerg
Boethling/ Alamy Stock Foto, p.4: Angelika
Hofer, p.5: alffoto/istock.com, p.6: Apib
Comunicação/CC BY-SA 2.0, p.8/9: Brasil2/
istockphoto.com, p.10: Clemens Höges,
Brasil2/istockphoto.com, p.11: ZDF Jana
Lemme, p.12: Johann Graf

8 de Octubre de 2021

El contenido de la publicación es responsabilidad del autor, así como de las personas entrevistadas, y no refleja necesariamente la posición de las organizaciones editoras.

Resumen ejecutivo

Presentado como „el mayor tratado de libre comercio del mundo“, el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Mercosur se firmó el 28 de junio de 2019 tras dos décadas de negociaciones y bloqueos. Según el texto acordado entre las partes – que ahora está pendiente de ratificación por el Parlamento Europeo, los parlamentos de los 26 Estados miembros de la UE y los 4 países del Mercosur –, la Unión Europea se comprometió a eliminar los aranceles para el 91% de los productos del Mercosur, favoreciendo directamente las exportaciones de commodities como carne de vacuno, soja y caña de azúcar, principales rubros de la agenda exportadora del bloque.¹

Sin embargo, la liberalización del comercio ha suscitado la preocupación en la sociedad civil en los países involucrados de que la presión de la demanda pueda ampliar el estímulo para más deforestación y la invasión de los territorios tradicionales no sólo en la Amazonía brasileña, sino también en otros biomas amenazados de la región, como la sabana del Cerrado, los humedales del Pantanal, la Mata Atlántica y el Gran Chaco.

Tal preocupación tiene motivos claros. En junio de 2019, mientras se negociaba el acuerdo en Bruselas, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (Inpe) registraba la tala de 920,4 kilómetros cuadrados de vegetación en la Amazonía, el tercer mes más devastador de la serie histórica iniciada en 2015, con un aumento del 88% respecto a la tasa registrada en junio de 2018.² Indiferente a las críticas, el presidente brasileño Jair Bolsonaro moviliza a sus bases en torno a sentimientos ultra nacionalistas, alegando ataques a la soberanía del país y denunciando una „campaña internacional“ en su contra.

A pesar de la introducción de dispositivos de control socio ambiental en el capítulo de Comercio y Desarrollo Sostenible del acuerdo comercial y del reconocimiento público de la defensora del pueblo de la UE, Emily O'Reilly,³ sobre fallas de los representantes de la parte europea en la conducción de estudios de impacto ambiental, social, económico y de derechos humanos, dichas medidas se consideran insuficientes para mitigar el aumento del riesgo de deforestación y las violaciones de derechos perpetradas contra pueblos indígenas y comunidades tradicionales.

En la zona de expansión de la agricultura y la ganadería, organizaciones brasileñas y paraguayas denuncian la falta de transparencia en las negociaciones del tratado y subrayan el hecho de que la conclusión del acuerdo se produjo precisamente en un momento en que los intereses de los grandes conglomerados comerciales y agroindustriales cuentan con mayor apoyo gubernamental para debi-

litar la legislación ambiental, a las comunidades tradicionales y los principios de seguridad alimentaria.

Este informe se construye a partir de entrevistas con líderes comunitarios de base, portavoces de organizaciones de la sociedad civil, científicos e investigadores de Brasil y Paraguay realizadas entre abril y agosto de 2021, con el objetivo de dar espacio y amplificar las demandas populares sobre el rumbo del acuerdo UE-Mercosur.

Diversas organizaciones contactadas por el equipo de investigación, no tenían sin embargo una posición específica sobre el TLC. Lo cual corrobora uno de los principales puntos de crítica al acuerdo que, tanto en América del Sur como en Europa, no contó con un proceso amplio de consulta. En lugar de ello, los gobiernos de los cuatro países sudamericanos y la Comisión de la UE llevaron a cabo reuniones de negociación a puerta cerrada con entidades patronales y lobistas durante dos décadas, sin una participación significativa de la sociedad civil. Ante este escenario, el presente informe busca saber lo que piensan los grupos sociales y organizaciones de base en Brasil y en Paraguay, ayudando a visibilizar sus puntos de vista. En la forma en que se presenta, el acuerdo UE-Mercosur es un documento ilegítimo e inaceptable a ambos lados del Atlántico. Su aprobación da un marco negativo a los países involucrados y constituye una vergüenza para cualquier proceso democrático.





El lobby de la agroindustria influye en las negociaciones

La firma del acuerdo UE-Mercosur estuvo marcada por un punto de inflexión hacia el conservadurismo en Sudamérica. Casi 20 años después del inicio del giro a la izquierda que recorrió el continente, Argentina, Brasil y Paraguay, países miembros fundadores del Mercosur, estuvieron gobernados simultáneamente por políticos de derecha y neoliberales.⁴ El regreso del Partido Colorado al poder en Paraguay con Horacio Cartes (2013-2018), la elección de Mauricio Macri (2015-2019) tras 12 años de kirschnerismo en Argentina, y la asunción de Michel Temer (2016-2018) en Brasil reactivaron las negociaciones que estaban estancadas desde 2012, en gran parte debido a los impasses sobre las preferencias arancelarias para los productos agrícolas.⁵

Motor de la agenda exportadora del Mercosur y actor directamente interesado en la culminación de las conversaciones del acuerdo comercial, el sector agrícola también jugó un papel importante en la transición hacia gobiernos de derecha. En Brasil, el lobby del sector agrícola, encabezado por el Frente Parlamentario Agropecuario, dio el 50% de los votos que llevaron a la destitución de la ex presidenta Dilma Rousseff en 2016.⁶ En las elecciones siguientes de 2018, el grupo apoyó al representante de la extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022) ya en la primera vuelta, nombrando a siete ministros en su gobierno.⁷ En Paraguay, las cooperativas agrícolas -muchas de ellas dirigidas por hacendados brasileños- organizaron en 2012 manifestaciones con tractores agrícolas („tractorazos“) pidiendo la destitución de Fernando Lugo.⁸ En Argentina, dirigentes de la Sociedad Rural Argentina (SRA) organizaron encierros contra el gobierno de Cristina Kirchner (2007-2015) y apoyaron abiertamente la candidatura de Macri.⁹ También en Uruguay, cuyo gobierno de centroizquierda había alimentado las negociaciones con la Unión Europea, la elección del derechista Lacalle Pou fue recibida con entusiasmo por la Federación Rural del país.¹⁰

La activa participación de los sectores rurales en la política interna de los países del Mercosur también se trasladó a lo largo de las negociaciones comerciales. Uno de los principales impulsores del reinicio de las conversaciones

fue la Confederación Brasileña de Agricultura y Ganadería (CNA), organización que agrupa a 1.957 sindicatos rurales repartidos por todo el país.¹¹ El cabildeo para la aprobación del acuerdo UE-Mercosur se intensificó en 2013, con la apertura de una oficina de representación de la CNA en Bruselas.¹² Bajo la presidencia de la senadora Kátia Abreu, la confederación actuó en misiones bilaterales con el gobierno brasileño y ejerció presión para que el sector industrial brasileño y de los otros países del bloque dejasen de frenar las conversaciones. „Utilizaremos todos los instrumentos legales y democráticos para cambiar el acuerdo en el Mercosur“, dijo Abreu durante un panel en Bruselas.¹³ La actuación en las negociaciones elevaría a la presidenta de la CNA a encabezar el Ministerio de Agricultura, que, bajo su mando, retomó las conversaciones con la Unión Europea entre 2015 y 2016.

Bajo el gobierno de Michel Temer, la confederación lanzó la Alianza AgroBrasil, un grupo de asociaciones del sector agrícola y ganadero que se reunió para intervenir en las negociaciones comerciales y, especialmente, en las discusiones sobre el acuerdo UE-Mercosur.¹⁴ Además de la CNA, AgroBrasil también incluye a la Asociación Brasileña de Industrias Exportadoras de Carne (Abiec), la Asociación Brasileña de Proteínas Animales (ABPA), la Asociación Brasileña de Industrias de Aceites Vegetales (Abiove), la Asociación Nacional de Exportadores de Jugos de Cítricos (CitrusBR), el Consejo de Exportadores de Café de Brasil (Cecafé), la Asociación Brasileña de Productos Lácteos (Viva Lácteos), la Asociación Brasileña de Productores de Soja (Aprosoja), entre otras.

Estas entidades tienen en común el hecho de ser las financiadoras del Instituto Pensar Agro (IPA), un think tank que presta apoyo técnico al Frente Parlamentario Agropecuario (FPA), el brazo institucional más conocido de la bancada del agronegocio, el más amplio en el Congreso brasileño. Todos los fondos del IPA se destinan al mantenimiento de las actividades del FPA. Estos recursos proceden de la contribución de más de 40 asociaciones que lo mantienen, que cuentan entre sus miembros con algunas de las principales empresas agrícolas del país. Esta lista

incluye 22 de las 50 mayores empresas de agronegocios de Brasil, según la revista Forbes: Bayer, Basf, BRF, JBS, Syngenta, Bunge y Cargill son algunas de ellas.¹⁵ Es de este grupo de asociaciones e institutos de donde provienen la mayoría de los proyectos de ley que no respetan los derechos de los pueblos indígenas, atacan el medio ambiente, relajan las normas para el uso de pesticidas, reducen las áreas de conservación y estimulan el robo de tierras en la Amazonía.

También están activos en comunicación: en agosto de 2020, una iniciativa llamada AgroSaber publicó un artículo con informaciones falsas para atacar la demarcación de tierras indígenas y promocionando la tesis de un „marco temporal“, actualmente en apreciación en el Tribunal Federal Supremo.¹⁶ La iniciativa está financiada por la Asociación Brasileña de Productores de Algodón (Abropa), miembro de IPA, y por CCAB, empresa brasileña comprada en 2019 por el grupo francés InVivo.¹⁷ Cuando el aumento de la deforestación y los incendios forestales en la Amazonía y el Pantanal despertaron las primeras inquietudes entre los negociadores de la UE frente a las políticas ambientales de Bolsonaro, fue la IPA y su frente parlamentario quienes tomaron la delantera y comenzaron a formular la narrativa de la política exterior brasileña en defensa del agronegocio.^{18 19}

Esta narrativa, que mezcla denuncias genéricas de „interferencia externa“ y datos generados a partir de estudios sesgados,²⁰ ha sido replicada por varias autoridades

brasileñas, como los ex ministros Ricardo Salles (Medio Ambiente) y Ernesto Araújo (Relaciones Exteriores) y la ministra de Agricultura Tereza Cristina Correa: „Ellos [los europeos] piensan que la agricultura brasileña es muy competitiva. Y lo es, pero no es destruyendo la imagen de Brasil como conseguirán alguna ventaja“, dijo Correa durante una misión comercial en India.²¹ „Brasil fue vilipendiado, nos pusieron la diana en la espalda y están disparando“.

Este discurso, sin embargo, ignora las evidencias científicas que plantean estas preocupaciones. Un estudio publicado en la revista Science el año pasado por un grupo de investigadores brasileños y europeos señala que, aunque la mayor parte de la producción agrícola brasileña esté libre de deforestación, cerca del 20% de las exportaciones de soja y al menos el 17% de las exportaciones de carne a la UE pueden estar relacionadas con deforestación ilegal debido a lagunas en las políticas de trazabilidad. La mayoría de las alertas relacionadas con posibles irregularidades (62%) provienen de sólo el 2% de las propiedades rurales.²² Otro trabajo, publicado por el Instituto Amazónico de los Pueblos y el Medio Ambiente, muestra que en un escenario de mayor elasticidad comercial y menor gobernanza de la tierra, la deforestación adicional generada por el acuerdo UE-Mercosur podría alcanzar las 260 mil hectáreas en los países del Mercosur. Se prevé que la mayor parte de esta conversión de tierras (55%) ocurra en Brasil, y podría avanzar sobre áreas sensibles como tierras indígenas y unidades de conservación.²³





Las organizaciones denuncian violaciones de los derechos humanos

Han transcurrido poco más de dos años desde la firma del Acuerdo UE-Mercosur el 28 de junio de 2019. Este corto lapso de tiempo, sin embargo, ha representado la mayor ola de retrocesos en materia de derechos sociales y ambientales en Brasil en los últimos 30 años.

Las imágenes del fuego y la destrucción en la Amazonía, el Cerrado y el Pantanal son la cara más visible de la tragedia que viven los pueblos tradicionales. Detrás de la destrucción hay una agenda política hábilmente amarrada por el gobierno de Bolsonaro. Desde los recortes del presupuesto para combatir la deforestación y los incendios forestales hasta la extinción de la secretaría de cambio climático; desde la privatización de los parques nacionales y las unidades de conservación hasta el nombramiento de militares sin experiencia para cargos técnicos.²⁴ El proyecto de deforestación avanza a grandes zancadas y encuentra apoyo en el Parlamento brasileño, donde el lobby del agronegocio tiene vía libre para imponer sus intereses.

En los últimos meses, se ha presentado una avalancha de proyectos de ley que modifican la legislación medioambiental y de derechos humanos, y se han aprobado rápidamente. Con el pretexto de la pandemia de COVID-19, los proyectos de ley no pasan por las comisiones y no se deja tiempo para celebrar audiencias públicas. Es el caso, por ejemplo, del proyecto de ley nº 2.633/2020 que establece el perdón por la ocupación irregular de tierras públicas con la simple inscripción en el Sistema de Registro Ambiental Rural.²⁵ Aprobado en la Cámara de Diputados tras

un proceso relámpago, dicho proyecto espera a la votación en el Senado, donde también se está valorando una propuesta similar que extiende el plazo para la legalización de tierras públicas invadidas de 2008 (plazo actual) a 2014. Ambas propuestas tienen su origen en una medida provisional firmada por Bolsonaro en 2019 que acabó perdiendo su validez antes de ser votada.

„La meta tramitación de este proyecto de ley ya generó un aumento de las invasiones de tierras indígenas“, dice Dinamam Tuxá, coordinador ejecutivo de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil. „Varias personas están haciendo uso del argumento débil y criminal de que se está tramitando una ley y promueven de esta forma nuevas invasiones. Esto ya está ocurriendo en el estado de Pará y en toda la Amazonía brasileña, con las invasiones de tierras indígenas“.

La mercantilización y la apertura de las áreas indígenas para el sector agropecuario también está en el centro de otros dos proyectos de ley. Uno de ellos, el proyecto de ley PL nº 490/2007, restringe la demarcación de las tierras indígenas adoptando la tesis del „marco temporal“, que determina que la demarcación sólo puede tener lugar en las áreas en las que hay pruebas de ocupación tradicional por parte de los pueblos indígenas antes del 5 de octubre de 1988, fecha de promulgación de la Constitución brasileña. Considerada inconstitucional por los indígenas, esta tesis es objeto de un juicio en el Tribunal Supremo que puede decidir el futuro de cientos de territorios.

El segundo es el PL n° 191/2020, a iniciativa del gobierno de Bolsonaro que liberaliza la minería en tierras indígenas. La minería ilegal ha sido uno de los principales puntos de divergencia entre los negociadores del acuerdo UE-Mercosur. Sólo en los últimos 10 años, según un estudio realizado por el proyecto MapBiomass, las áreas ocupadas por mineros ilegales (garimpeiros) dentro de tierras indígenas crecieron un 495%, especialmente en los territorios Kayapó (7.602 ha) y Munduruku (1.592 ha), en el estado de Pará, y en el territorio Yanomami (414 ha), entre Amazonas y Roraima.²⁶ En este último, entre mayo y junio, los garimpeiros promovieron una serie de invasiones en la región de Palimí, lanzando bombas de gas y disparando contra la comunidad.²⁷

Según Antônio Eduardo Cerqueira de Oliveira, secretario ejecutivo del Consejo Indígena Misionero (Cimi), el acuerdo comercial podría ser extremadamente perjudicial para las comunidades indígenas si no se revisan los términos:

“Hablamos con dos asesores de la UE que introdujeron en la conversación la preocupación de algunos países, que querían escucharnos. Planteamos nuestras críticas sobre aspectos que no se estaban verificando sobre la demarcación y los derechos constitucionales de los pueblos indígenas. Los asesores de la UE dijeron que, desgraciadamente, en cuanto al comercio en sí, no se podía hacer mucho. Las comunidades indígenas están preocupadas por la regularización de sus tierras y el uso de los territorios. Hay videos de mineros y empresarios locales que dicen que la situación ha cambiado con Bolsonaro. Que ahora ellos determinan las reglas. Que ya no hay derechos indígenas.”

Antônio Eduardo Cerqueira de Oliveira, Cimi

La inseguridad también es una constante en Paraguay, donde los movimientos sociales temen que se aceleren las invasiones de tierras por parte de los terratenientes sojeros. „En Paraguay existe una estructura de seguridad paralela formada por tropas paramilitares“, afirma Perla Álvarez, miembro de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Rurales e Indígenas de Paraguay (Conamuri) y de la Vía Campesina. „Son los capataces de las empresas que muchas veces actúan como justicieros de los patrones con la connivencia de la policía“. „Muchos son brasileños“, dice. Con la previsión de expansión de las tierras de pastoreo para la producción de monocultivo de soja como consecuencia de la expansión de los mercados de la Unión Europea, Conamuri prevé un agravamiento de la violencia derivada de los conflictos por la tierra:

“Un acuerdo en el que no se consulta a las mujeres campesinas de Paraguay afecta a la vida de las familias, a la salud de los niños, de los ancianos, además de ser una afrenta a los derechos individuales de las propias mujeres, que tienen que cuidar de su propia salud, de su cuerpo y de sus hijos, además de gestionar sus tierras. Las mujeres sostienen la agricultura campesina. Son ellas las que producen los alimentos. Por eso ellas son el blanco de los conflictos.”

Perla Álvarez, Conamuri

El mismo impasse experimentan las y los campesinos y pequeños agricultores familiares en Brasil. Desde 2019, el gobierno intenta flexibilizar las condiciones de compra y venta de tierras en los asentamientos de la reforma agraria. „La reforma agraria es para la gente que necesita la tierra, para la gente con bajos ingresos. No para personas oportunistas“, señala Kelli Mafort, miembro de la coordinación nacional del Movimiento de los Sin Tierra (MST). „Quieren imponer títulos de propiedad para que las personas sean propietarias y vendan esas tierras o las coloquen en operaciones bancarias“.

En diciembre de 2019, pocos meses después del anuncio de la firma del acuerdo UE-Mercosur, representantes de quilombolas, o comunidades rurales negras, y activistas de derechos humanos se reunieron en Bruselas con miembros de la Delegación brasileña del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). El grupo, formado por miembros de la Coalición Negra por Derechos y de la Coordinadora Nacional de las Comunidades Rurales Negras Quilombolas (CONAQ), defendió la adopción de cláusulas que salvaguarden la vida de las personas negras y garanticen la soberanía de los pueblos quilombolas, de acuerdo con las obligaciones contenidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El objetivo es evitar violaciones de los derechos humanos causadas por la ausencia de consulta previa a las comunidades afectadas, como en el caso de la instalación de la Base Aeroespacial de Alcántara, en el estado de Maranhão.²⁸ El acuerdo UE-Mercosur, sin embargo, no prevé instrumentos de consulta previa. Las reivindicaciones quilombolas siguen sin estar contempladas en lo más mínimo en el texto básico del acuerdo.

„Este acuerdo es un proyecto de re colonización de América Latina“, dice Denildo Rodrigues, de la coordinación nacional de CONAQ. „Europa está re colonizando nuestro continente, transformándonos en simples productores de bienes primarios“. El dirigente quilombola considera que el acuerdo UE-Mercosur se está construyendo desde la cima hacia abajo, sin hablar con la población para saber si es viable o no: „Una vez aprobado el acuerdo, las violaciones tienden a aumentar, porque la disputa para llevar a cabo los emprendimientos de infraestructura y del agrobusiness es muy grande“.

La expansión de los agronegocios amenaza a las comunidades tradicionales

Bajo el punto de vista de quienes defienden los derechos humanos, el acuerdo UE-Mercosur puede contribuir al aumento de los conflictos en el medio rural. La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), vinculada a la Iglesia Católica, ha denunciado esta expansión describiendo casos emblemáticos del I Cerrado. En uno de estos episodios, la entidad detalla un enfrentamiento que involucra a la Asociación de Moradores de la Comunidad de Melancias en el municipio de Gilbués, al sur de Piauí, y a los propietarios de las haciendas Alvorada, Roda de Ferro y Paraíba.

El año pasado, durante la pandemia de COVID-19, las familias fueron sorprendidas con dos retro excavadoras deforestando un área comunitaria. Según los residentes, el propietario de la Hacienda Paraíba, Celso Constantino, había anunciado días antes que talaría la zona tras haber sido incluida en un proyecto de regularización de tierras del gobierno de Piauí, financiado por el Banco Mundial.²⁹

Representante pastoral y una de las coordinadoras de la CPT, la hermana Jeanne Bellini considera que el acuerdo UE-Mercosur no aporta ningún beneficio a la población brasileña. „La pandemia nos ha enseñado que somos interdependientes y que lo que ocurre en un país tiene implicaciones para los demás“, dice la monja. „Un acuerdo que favorece mucho a una parte y perjudica proporcionalmente a la otra no es un buen acuerdo. La mayoría en Europa lo reconocen y quieren justicia social para todas las personas“.

Nacida en Estados Unidos y contemporánea de Dorothy Stang -monja premiada por su lucha en defensa de los campesinos y asesinada por latifundistas en Pará en 2005-, Bellini sostiene que el acuerdo refleja una visión en la que América Latina queda relegada a ser productora de commodities o materias primas para la exportación,³⁰ teniendo como efecto la primarización de las economías del Mercosur: „El acuerdo UE-Mercosur tendrá un impacto



directo en los medios de subsistencia, en la alimentación y en la economía de agricultura familiar campesina y de los pueblos tradicionales. Al ver invadidas sus tierras, estas personas se ven obligadas a trasladarse a las afueras de las ciudades y a depender de la compra de alimentos. Las familias campesinas que solían producir alimentos para los mercados regionales y locales se encuentran sin nada“.

Antônio Cerqueira, del Cimi, cita el ejemplo de Mato Grosso do Sul, estado donde los pueblos guaraní kaiowá, guaraní ñandeva y terena han sufrido un proceso continuo de despojo y expulsión de sus territorios: „Es habitual que estos indígenas se trasladen a las ciudades para trabajar en frigoríficos o en la recolección de manzanas en la región Sur donde, en diferentes ocasiones, se describen condiciones de trabajo análogas a la esclavitud“.

Esta presión territorial se da incluso en regiones donde la ocupación agrícola está consolidada, como la Mata Atlántica, un caso exclusivo de bioma brasileño protegido por una legislación específica, que demuestra el proceso de debilitamiento de los instrumentos de protección ambiental en Brasil desde la elección de Bolsonaro. „La Mata Atlántica tiene una ley específica para su conservación y necesitamos certeza de que las normas ambientales pre-



vistas en el acuerdo UE-Mercosur la toman en cuenta“, dice Luís Fernando Guedes Pinto, director de la Fundación SOS Mata Atlántica.

Con tan sólo el 12,4% de su cobertura original aún conservada, la Ley de la Mata Atlántica prohíbe expresamente la conversión de áreas del bioma original en plantaciones.³¹ En 2020, sin embargo, un decreto del Ministerio de Medio Ambiente consideró que esta legislación no debe superponerse al Código Forestal (Código Florestal), que tiene normas más flexibles en lo que se refiere a la conversión de biomas originales en áreas para la producción agrícola y pecuaria. „Si este entendimiento prevalece, en el ámbito del Acuerdo UE-Mercosur, la deforestación del Bosque Atlántico sería legal y posible, ya que los marcos legales del tratado se limitan a los ordenamientos jurídicos nacionales“, dice Pinto. „Es esencial que los negociadores en Europa sean conscientes de los posibles cambios en la legislación ambiental brasileña, que afectarán a los términos ambientales del país una vez que el acuerdo esté en marcha“.

Una presión que también se siente del lado paraguayo de la frontera. Según Guillermo Ortega, investigador de la ONG Base Investigaciones Sociales BASE-IS, el principal

impacto del acuerdo en el país se da en la expansión de la superficie para cultivo de soja, en la región oriental, que también estimula la ganadería en el Chaco. „Es un binomio: lo uno no funciona sin lo otro“, afirma. Un avance que afecta directamente a las comunidades indígenas aisladas que viven en la región.³²

„La producción de ganado se ha mudado a la Región Occidental, que forma parte del Gran Chaco. Allí se está produciendo actualmente uno de los procesos de deforestación más acelerados del mundo“, advierte la ONG Heñói. „El Chaco alberga ecosistemas frágiles que, al perder la cobertura vegetal original, se convierten rápidamente en desiertos salados, impactando gravemente la disponibilidad de agua potable para la población local, y eliminando las fuentes de alimento y medicinales para los pueblos indígenas que aún habitan este territorio“.

El avance del agronegocio en estos territorios genera también pérdida de empleos. „Mientras que 5.000 hectáreas de producción campesina pueden generar hasta 817 empleos directos, una hacienda de monocultivo genera sólo 37 empleos“, destaca Heñói.



El acuerdo comercial abre el camino a los plaguicidas

Otro punto muy criticado del acuerdo UE-Mercosur es la adopción de un „doble rasero“ en cuanto a la tolerancia sobre el uso de pesticidas. Los principales beneficiarios de los actuales términos del acuerdo son los conglomerados agroquímicos europeos. Entre las empresas que financian indirectamente el Frente Parlamentario del Agronegocio FPA, las alemanas Bayer y BASF poseen en conjunto cerca del 12% del mercado brasileño de agrotóxicos.³³

Además, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Brasil es el tercer mayor consumidor de pesticidas del mundo, por detrás de China y Estados Unidos.³⁴ Pero a diferencia de los países de la UE, este consumo se dirige principalmente a los plaguicidas altamente peligrosos (HHP, por las siglas en inglés de ‘highly hazardous pesticides’), lo que convierte al país en el mayor mercado del mundo en este segmento, con una quinta parte del comercio global de HHP.³⁵

El hambre de plaguicidas de Brasil está impulsada por su gigantesca producción de cultivos modificados genéticamente (OMG). Con 50,2 millones de hectáreas de cultivos transgénicos, el país tiene la segunda mayor superficie GMO del mundo, por detrás de Estados Unidos. Casi el 97% de toda la producción de soja brasileña se compone de semillas transgénicas, con índices similares en la producción de maíz y algodón.³⁶

„El principio de precaución que tanto aprecia la Unión Europea no se aplica aquí“, afirma la politóloga Maureen Santos, coordinadora del grupo consultivo nacional de la ONG brasileña FASE. „Esto causa una división en dos tipos de ciudadanía: la del Sur, que consumirá productos de menor calidad, sujetos a contaminación y menos sostenibles; y la de la UE, que tendrá productos con más garantías y más protecciones porque están sujetos a legislaciones más fuertes“.





Una situación similar se vive al otro lado de la frontera. „Hay un cuestión de derechos humanos que no se suele considerar en relación al tema de los derechos colectivos“, apunta Perla Álvarez, de Conamuri. „Se suele pensar que los derechos humanos son un tema que se ejerce de forma individual, pero vemos la necesidad de profundizar en el tema de los derechos colectivos. El modelo de desarrollo del agronegocio afecta colectivamente a las comunidades, a indígenas y a los pueblos del interior“

La activista paraguaya cita el ejemplo de los pesticidas: „El uso intensivo de agrotóxicos genera un fenómeno llamado deriva, que es el efecto de la dispersión por tierra, agua, viento y lluvias, más allá de las extensiones que se quieren controlar. Esto viola nuestro derecho colectivo a vivir en un ambiente sano, porque el efecto inmediato de los agrotóxicos impacta en la salud de las poblaciones, especialmente de mujeres y niños.“

„Hay un aumento visible de los problemas de piel, alergias y aumento de las tasas de leucemia en niños y jóvenes“, dice Guillermo Ortega, de Base-IS. „En general, se trata de niños que viven o estudian cerca de las plantaciones de soja. En total, hemos identificado 99 escuelas expuestas al efecto de las fumigaciones aéreas“, añade.³⁷

„Aunque el tratado establece el respeto a las normas ambientales, consideramos que la cuestión de los derechos humanos es letra muerta, porque los empresarios no los respetan en absoluto“, dice Ortega. „Una de las precauciones que hay que establecer es garantizar las fuentes de agua. Las comunidades deben estar protegidas dentro de una franja de seguridad de 100 metros desde los cultivos, para evitar que, al pulverizar productos tóxicos, no alcancen a las personas que viven dentro de ese espacio.“

Científicos critican la debilidad de las salvaguardias

En febrero de 2021, un grupo de 11 investigadores brasileños y europeos enviaron a Bruselas un documento en el que solicitaban la reapertura de las negociaciones del tratado comercial, con el argumento de que el texto base acordado en 2019 ignoraba las demandas de los grupos ecologistas para evitar la presión del agronegocio sobre los principales biomas de Brasil.

„La peor fase de la deforestación ocurrió después de 2019, cuando se firmó el texto base del acuerdo“, evalúa uno de estos científicos, Carlos Rittl, investigador visitante en el Instituto de Estudios Avanzados de Sostenibilidad de Potsdam, Alemania, y ex secretario ejecutivo del Observatorio del Clima. „Si fuera lo suficientemente bueno, el curso de los acontecimientos en Brasil ya habría cambiado radicalmente“.

Rittl señala que además de los daños directos al medio ambiente causados por la presión del agronegocio sobre los biomas, uno de los grandes riesgos del tratado es que se convierta en una especie de „sello verde“ para la política ambiental de Bolsonaro. „El acuerdo en sí mismo servirá como un aval, una señal de confianza de la Unión Europea de que Brasil es y será cumplidor de sus promesas de sostenibilidad -aunque estemos viendo que el país se mueve en una dirección completamente opuesta a esa“.

„Es un acuerdo sin dientes“, resume Maureen Santos, de FASE. „Las salvaguardias de protección ambiental son frágiles y no especifican mecanismos efectivos de trazabilidad del origen de los productos que puedan garantizar la certificación de sostenibilidad. El hecho de que el tratado prevea cuotas para la expansión de las exportaciones de carne y productos ligados al complejo de la soja también genera preocupación, ya que implica un aumento en el uso de agroquímicos.“

“Una de nuestras preocupaciones es que tenemos un acuerdo que no define ninguna sanción. Esto no se menciona en el capítulo de comercio y desarrollo sostenible. El texto no contempla estos mecanismos, ni se prevén normas de resolución de conflictos y arbitraje. Es necesario que el acuerdo fortalezca los marcos legales existentes y no que la Unión Europea avale el desmantelamiento de las políticas ambientales por parte del gobierno brasileño, lo que también tendría implicaciones para los demás países del Mercosur.”

Maureen Santos, FASE

„Aunque el acuerdo tiene todo un capítulo dedicado a Comercio y Desarrollo Sostenible, no hay mecanismos que garanticen el cumplimiento de lo que está en el papel“, analiza Rittl. „No hay un compromiso de no regresión ambiental, de respeto a los derechos y a la protección de los pueblos indígenas, de la plena aplicación del Acuerdo de París por parte de cada uno de los países firmantes, de participación de la sociedad civil en el seguimiento de la aplicación del tratado. Todo es muy bonito sobre el papel, pero falta en este tipo de acuerdos es lo que se llama enforcement, la garantía de que cada país, para acceder a los beneficios del acuerdo, cumpla con las obligaciones pactadas“.

En diciembre de 2020, como la reacción más fuerte al acuerdo UE-Mercosur hasta el momento, 106 organizaciones reunidas en el „Frente de Organizaciones de la Sociedad Civil Brasileña contra el Acuerdo UE-Mercosur“ publicaron un manifiesto rechazando los términos negociados³⁸. Según el Frente, estos términos traerán “impactos socioeconómicos, laborales, territoriales, ambientales y climáticos significativos para Brasil y los demás países del Mercosur. (...) Al intercambiar productos agrícolas y minerales por productos industrializados con mayor valor agregado, el acuerdo estimula la profundización de la desindustrialización, la primarización de la economía, la evasión de divisas y la evasión fiscal en los países del Mercosur“.



Referencias

- 1 GRAIN (2021) EFTA-Mercosur: another low blow to climate, peoples' rights and food sovereignty. May 5, 2021. <https://grain.org/en/article/6662-efta-mercosur-another-low-blow-to-climate-peoples-rights-and-food-sovereignty>
- 2 Moreno, A.C. (2019). Desmatamento na Amazônia em junho é 88% maior do que no mesmo período de 2018. G1, Jul. 3, 2019. <https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/07/03/desmatamento-na-amazonia-em-junho-e-88percent-maior-do-que-no-mesmo-periodo-de-2018.ghtml>
- 3 European Commission. (2021) Ombudsman: Sustainability assessment should have been completed before EU-Mercosur trade deal agreed by negotiators. Mar. 18, 2021. <https://www.ombudsman.europa.eu/pt/press-release/en/139425>
- 4 Forero, J.; Luhnnow, D. (2019) The Left's 'Pink Tide' in Latin America Is Receding. The Wall Street Journal, Dec. 19, 2019 <https://www.wsj.com/articles/the-leftist-pink-tide-in-latin-america-is-receding-11576772757>
- 5 Grieger, G. (2019) The trade pillar of the EU-Mercosur Association Agreement. European Parliamentary Research Service (EPRS), PE 640.138, August 2019. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640138/EPRS_BRI\(2019\)640138_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640138/EPRS_BRI(2019)640138_EN.pdf)
- 6 Castilho, A. L. (2017) Frente Parlamentar da Agropecuária compôs 50% dos votos do impeachment e 51% dos votos para manter Temer. De Olho nos Ruralistas, Sep. 25, 2017 <https://deolhonosruralistas.com.br/2017/09/25/frente-parlamentar-da-agropecuaria-compos-50-dos-votos-do-impeachment-e-51-dos-votos-para-manter-temer/>
- 7 Carvalho, I. (2018) Bancada ruralista já emplacou sete deputados no governo Bolsonaro. De Olho nos Ruralistas, Nov. 30, 2018 <https://deolhonosruralistas.com.br/2018/11/30/bancada-ruralista-ja-emplacou-sete-deputados-no-governo-bolsonaro/>
- 8 Bassi, B. S. Cooperativas encabeçadas por brasileiros protagonizaram impeachment de Lugo. De Olho nos Ruralistas, Aug. 26, 2018 <https://deolhonosruralistas.com.br/deolho-noparaguai/2018/08/26/cooperativas-encabeçadas-por-brasileiros-protagonizaram-impeachment-de-lugo/>
- 9 Heath, M. (2019) Apoyo de agro argentino a Macri cruje de cara a elecciones presidenciales. Reuters, Apr. 22, 2019 <https://www.reuters.com/article/politica-argentina-elecciones-idLTAKCN1RYOWT>
- 10 Lemos, H. (2021) "Vemos un gobierno que atiende nuestros reclamos." El País Rurales, Jul. 3, 2021. <https://rurales.elpais.com.uy/gremiales/vemos-un-gobierno-que-atiende-nuestros-reclamos>
- 11 Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (2021) <https://www.cnabrazil.org.br/>
- 12 Conexão TO. (2013) Senadora Kátia Abreu abre escritório da CNA junto à União Europeia em Bruxelas. Jun. 20, 2013 <https://conexaoto.com.br/2013/06/20/senadora-katia-abreu-abre-escritorio-da-cna-junto-a-uniao-europeia-em-bruxelas>
- 13 Agência Estado. (2013) CNA: Mercosul trava comércio com União Europeia. Jun. 19, 2013. <https://www.gazetadopovo.com.br/economia/cna-mercosul-trava-comercio-com-uniao-europeia-06veltyjcrpuq1uv7x3u4hy6m/>
- 14 Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. (2019) Aliança Agrobrazil comemora acordo entre Mercosul e União Europeia. Jul. 2, 2019 <https://www.cnabrazil.org.br/noticias/alianca-agrobrazil-comemora-acordo-entre-mercosul-e-uniao-europeia>
- 15 Arroyo, P. (2019) Multinaionais são financiadoras ocultas da Frente Parlamentar da Agropecuária. May. 21, 2019. <https://deolhonosruralistas.com.br/2019/05/21/multinaionais-sao-financiadoras-ocultas-da-frente-parlamentar-da-agropecuaria/>
- 16 Fakebook.eco (2021) Dado espalhado por ruralistas sobre prejuízo com demarcação indígena vem de estudo secreto. Aug. 27, 2021. <https://fakebook.eco.br/dado-espalhado-por-ruralistas-sobre-prejuizo-com-demarcacao-indigena-vem-de-estudo-secreto/>
- 17 AgroSaber (2021). <https://agrosaber.com.br/>
- 18 Agência FPA. (2019) FPA recebe presidente da Apex-Brasil para debater imagem dos produtos brasileiros no exterior. Nov. 26, 2019. <https://agencia.fpagropecuaria.org.br/2019/11/26/fpa-recebe-presidente-da-apex-brasil-para-debater-imagem-dos-produtos-brasileiros-no-exterior/>
- 19 Fundação Alexandre de Gusmão (2021). Alocução do Ministro das Relações Exteriores, Embaixador Ernesto Araújo, em videoconferência organizada pela Frente Parlamentar Agropecuária – FPA. Mar. 2, 2021 <https://funag.gov.br/index.php/pt-br/2015-02-12-19-38-42/3715>

- 20 Schreiber, M. (2019) Cientistas questionam 'guru ambiental de Bolsonaro' que coloca Brasil como líder em preservação. Jul. 23, 2019. <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-49081586>
- 21 Agência Estado. (2020) Na Índia, Tereza Cristina diz que agricultura brasileira não é vilã. Jan. 26, 2020. https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2020/01/26/internas_economia,823861/na-india-tereza-cristina-diz-que-agricultura-brasileira-nao-e-vila.shtml
- 22 Rajão, R.; Soares-Filho, B.; Nunes, F. (2020) The rotten apples of Brazil's agribusiness: Brazil's inability to tackle illegal deforestation puts the future of its agribusiness at risk. *Science* 369 (6501), 246-248. DOI: 10.1126/science.aba664
- 23 Amazon Institute of People and the Environment. (2020) Is the EU-MERCOSUR trade agreement deforestation-proof? https://amazon.org.br/wp-content/uploads/2020/11/mercoulue_en_imazon.pdf
- 24 Menegassi, D. (2021) Ministério do Meio Ambiente tem menor orçamento das últimas duas décadas. Jan. 24, 2021. <https://www.oeco.org.br/noticias/ministerio-do-meio-ambiente-tem-menor-orcamento-das-ultimas-duas-decadas/>
- 25 Instituto Socioambiental. (2021) Conexões entre o CAR, desmatamento e o roubo de terras em áreas protegidas e florestas públicas. Abril 2021. https://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/nsa/arquivos/nt_isa_conexoes_car_desmatamento_grilagem.pdf
- 26 MapBiomias. (2021) Área ocupada pela mineração no Brasil cresce mais de 6 vezes entre 1985 e 2020 <https://mapbiomas.org/area-ocupada-pela-mineracao-no-brasil-cresce-mais-de-6-vezes-entre-1985-e-2020>
- 27 Rede Amazônica. (2021) Garimpeiros jogam bombas em comunidade na região alvo de ataques na Terra Yanomami, diz Associação. Jun. 8, 2021. <https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2021/06/08/garimpeiros-jogam-bombas-em-comunidade-na-regiao-alvo-de-ataques-na-terra-yanomami-diz-associacao.ghtml>
- 28 Justiça Global. (2019) Texto base do protocolo comunitário sobre consulta e consentimento prévio, livre e informado das comunidades quilombolas do território étnico de Alcântara/MA. http://www.global.org.br/wp-content/uploads/2020/03/Protocolo_Alcantara_web_final.pdf
- 29 Comissão Pastoral da Terra. (2020) Nota Pública: Os conflitos no campo não param no sul do Piauí. May. 9, 2020. <https://www.cptnacional.org.br/publicacoes/noticias/articulacao-cpt-s-do-cerrado/5195-nota-publica-os-conflitos-no-campo-nao-param-no-sul-do-piaui>
- 30 Fritz, T. (2020) Risks to Climate Protection and Human Rights. Misereor, Greenpeace & CIDSE. <https://www.cidse.org/wp-content/uploads/2020/06/Study-EU-Mercosur-Agreement-Risks-to-Climate-Protection-and-Human-Rights....pdf>
- 31 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. (2019) SOS Mata Atlântica e INPE lançam novos dados do Atlas do bioma. May. 23, 2019. http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=51115
- 32 Earthsight. (2020) Grand Theft Chaco: the luxury cars made with leather from the stolen lands of an uncontacted tribe <https://www.earthsight.org.uk/grandtheftchaco-en>
- 33 Greenpeace. (2020) EU-Mercosur: Double standards concerning agrottoxics https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/eu_mercosur_double_standards_concerning_agrottoxics_2020.pdf
- 34 FAOSTAT (2020). Pesticides use. <http://www.fao.org/faostat/en/#data/RP/visualize>
- 35 Greenpeace. (2020) Unearthed. Soya, corn and cotton make Brazil world leader for hazardous pesticides. <https://unearthed.greenpeace.org/2020/02/20/brazil-pesticides-soya-corn-cotton-hazardous-croplife/>
- 36 International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA). Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops in 2017: Biotech Crop Adoption Surges as Economic Benefits Accumulate in 22 Years. ISAAA Brief No. 53. ISAAA: Ithaca, New York.
- 37 Base Investigaciones Sociales. Escuelas rurales fumigadas en Paraguay (2020). <https://www.baseis.org.py/presentan-libro-sobre-escuelas-rurales-fumigadas-en-paraguay/>
- 38 Front of Brazilian civil society organizations against the Mercosur-EU agreement (2020) <https://www.bilaterals.org/?front-of-brazilian-civil-society&lang=en>



Salva la Selva/ Rettet
den Regenwald e.V.
Jupiterweg 15
22391 Hamburgo

Tel: +49 40 41 03 804
Fax: +49 40 45 00 144
info@salvalaselva.org
www.salvalaselva.org



Colabora
Centro de Pesquisa
e Documentação Chile-
América Latina (FDCL)
Gneisenastr.2a *
Im Mehringhof *
D-10961 Berlin
info@fdcl.org
www.fdcl.org



Co-Autor
De Olho nos Ruralistas |
Agribusiness Watch
Rua Araújo, 124 - República -
São Paulo, SP - Brazil

Phone: +55 11 970242614
bruno@deolhonosruralistas.com.br
<https://deolhonosruralistas.com.br>